



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (03) de noviembre de 2020

AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	JOSE RODRIGO CASTAÑO ALZATE terojo@hotmail.com
DEMANDADO	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL-CASUR Diana.piedrahita128@casur.gov.co judiciales@casur.gov.co
RADICACIÓN	76001-33-33-005-2015-00005-01

I.- ASUNTO

Procede la Sala a resolver la solicitud presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de aclaración, adición y/o complementación de la sentencia proferida por esta Corporación, el 06 de octubre de 2017 en el asunto de la referencia, y la cual fue interpuesta dentro del término de ejecutoria de la misma, según la constancia secretarial que antecede.

II.- ANTECEDENTES

El apoderado judicial de la parte actora, presentó escrito en el que solicita la aclaración, adición y/o complementación de la sentencia No. 206 del 06 de octubre de 2017, dictada por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, manifestando que dicha providencia omitió referirse frente a hechos que en su sentir hacían parte de la litis.

Concretamente, se señala que la sentencia debe manifestar ampliamente las razones jurídicas por las cuales debe mantenerse en el mundo jurídico el acto administrativo demandado, a pesar de estar soportado al momento de su expedición en una norma derogada (artículo 51 del Decreto 1091 de 1995) y en una norma irregular (parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004)¹.

III.- CONSIDERACIONES

Por regla general y para evitar la inseguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por el mismo juez que la dictó, quien, una vez la ha proferido, pierde competencia para volver sobre el asunto por él resuelto, de manera

¹ Folio 274 a 275.

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	76001-33-33-005-2015-00005-01
ACTOR:	JOSE RODRIGO CASTAÑO ALZATE
ACCIONADA:	CASUR

que no tiene la facultad para revocarla ni reformarla y sólo, por excepción, podrá aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos términos en que se regulan dichos supuestos por la ley procesal.

El artículo 287 del Código General del Proceso, sobre la solicitud de adición de la providencia, señala:

“Artículo 287. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquier extremo de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (...).”

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en providencia del 3 de agosto de 2017, indicó que: *“(...) la adición de una providencia judicial es procedente cuando el juez omite o se abstiene de pronunciarse sobre aspectos relevantes de la litis que debía resolver, lo cual no da lugar a que mediante la misma el juez pueda variar, reformar o revocar el fondo de su propia decisión. La institución procesal de la adición de providencias judiciales no puede implicar cambios de fondo en la providencia y, su utilización no puede implicar que se introduzca modificación alguna a lo ya definido. (...)”*²

Sea lo primero indicar que, a pesar de que en el escrito presentado por la parte actora, se pide una aclaración, adición y/o complementación de la sentencia, de la lectura del mismo, se extrae que lo pretendido realmente es que se adicione, por considerar que esta Corporación, omitió pronunciarse frente a puntos que en su sentir, hacen parte de la litis.

Para empezar, se observa que en el escrito de la demanda el apoderado judicial de la parte actora solicitó como pretensión la reliquidación de la asignación de retiro del actor, con la inclusión de las partidas computables que contempla el Decreto 1213 de 1990, manteniendo el quantum del 85% que le fuera reconocido inicialmente.

Ahora, revisada la providencia de la cual se solicita la adición, se observa que esta Sala de Decisión, luego de efectuar un recuento normativo en relación con la profesionalización de la **POLICÍA NACIONAL** y el régimen salarial y prestacional que rige al personal del nivel ejecutivo; así como también, después de haberse efectuado la revisión de los elementos de prueba, concluyó que al haberse homologado el demandante al nivel ejecutivo de la **POLICÍA NACIONAL**, para la liquidación de su asignación de retiro, le fueron aplicadas las disposiciones que consagran el régimen pensional y de asignación de retiro para dicho personal, cuales son, el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 y el artículo 23, ordinal 23.2 del Decreto 4433 de 2004, normas que de manera uniforme enlistan las partidas computables; e indican a su vez, que no serán reconocidos factores diferentes a los allí previstos.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2017, Consejero Ponente: Dra. **STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO**, radicación: 15001-23-31-000-2007-00525-01 (50642).

MEDIO DE CONTROL:
RADICACIÓN:
ACTOR:
ACCIONADA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
76001-33-33-005-2015-00005-01
JOSE RODRIGO CASTAÑO ALZATE
CASUR

Adicionalmente, se determinó que lo pretendido por el actor, en relación con el cómputo de los factores de liquidación propios del personal del nivel ejecutivo de la institución policial y de las partidas más favorables del régimen prestacional establecido en el Decreto 1213 de 1990, no resultaba procedente, pues debe aplicarse el régimen del nivel ejecutivo en su integridad, por haberse acogido voluntariamente y haber consolidado su derecho pensional en vigencia del mismo.

De manera pues que los argumentos que señala el peticionario no tienen ningún fundamento, dado que las normas que referencia (artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004), no se relacionan con las disposiciones que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la prestación económica del actor, pues como quedó visto, las partidas computables que se incluyeron en su prestación económica, fueron las establecidas en el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 y el artículo 23, ordinal 23.2 del Decreto 4433 de 2004, normas que se encuentran vigentes y que corresponden al régimen propio del personal del nivel ejecutivo de la **POLICIA NACIONAL**.

Así las cosas, la petición de adición de la sentencia presentada por el apoderado judicial de la parte actora no será acogida, pues la Corporación no omitió referirse a ningún argumento de la demanda, y por el contrario, lo que se observa es que el accionante pretende seguir discutiendo el fondo del asunto, el cual quedó definido en la sentencia.

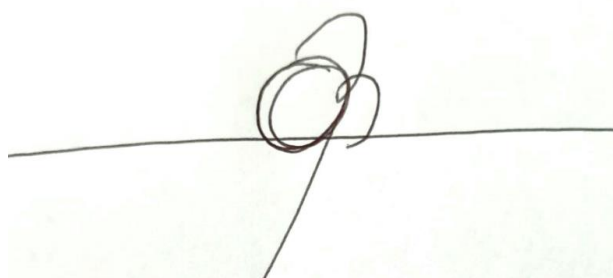
Por lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: **NEGAR** la solicitud de adición de la sentencia proferida por esta Corporación el 06 de octubre de 2017, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

JHON ERICK CHAVES BRAVO



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado